

ENCJ.

DECLARACIÓN DE RIGA

Frente a las Amenazas al Estado de Derecho

I. Preámbulo

El Estado de Derecho es esencial para sostener los valores fundamentales de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad y los derechos humanos (Artículo 2 del TUE) sobre los cuales se funda la Unión Europea. La observancia del Estado de Derecho requiere que todos los poderes públicos actúen conforme a estos valores y dentro de los límites establecidos por la ley. El poder judicial actúa como garante del respeto a los derechos de los individuos mediante la aplicación de la ley. El poder judicial debe contribuir a mantener el Estado de Derecho a través de decisiones de alta calidad, justicia oportuna y apertura hacia la sociedad. Por ello, su imparcialidad e independencia deben ser defendidas de manera inequívoca.

2. El Estado de Derecho abarca múltiples elementos que se manifiestan en diferentes áreas de actividad. Esta declaración aborda no solo las amenazas al Estado de Derecho, sino también las acciones necesarias para enfrentarlas desde la perspectiva de los Consejos del Poder Judicial y otros órganos de gobierno judicial alternativos.

3. En los últimos años, una combinación de factores ha generado desafíos fundamentales al Estado de Derecho. Estos factores incluyen desarrollos políticos, cambios sociales, una transformación total del panorama mediático y el impacto de los avances digitales. Cada uno de estos fenómenos representa amenazas reales al Estado de Derecho y desafíos asociados para el poder judicial. Para establecer cómo enfrentar estos desafíos, primero debemos describirlos.

II. Desafíos

4. Las amenazas al Estado de Derecho varían en naturaleza, magnitud y efecto. Algunas son claras, mientras que otras son más sutiles y emergen a través de una combinación de medidas implementadas a lo largo del tiempo. Los efectos de tales medidas pueden ir desde un efecto paralizante dentro del poder judicial hasta la erosión de la confianza de la sociedad en las instituciones judiciales.

5. Varios desafíos se relacionan con la separación de poderes y el sistema de pesos y contrapesos —el núcleo mismo de la democracia—. En este marco, el poder judicial debe conservar la facultad de revisar la legalidad de las acciones del poder ejecutivo y, cuando corresponda, del legislativo. Cuando este equilibrio se altera, el sistema judicial no puede funcionar adecuadamente. Se socava el derecho a un juicio justo por un tribunal independiente.

6. En algunos países, las relaciones con los otros poderes del Estado se han vuelto cada vez más problemáticas. La situación se ha deteriorado en varios países miembros y observadores de la ENCJ. El debilitamiento del poder judicial puede incluir la falta de implementación de decisiones contrarias al gobierno, la ausencia de consulta adecuada con el poder judicial sobre proyectos de ley relevantes y la implementación de reformas sin el consentimiento del poder judicial. Los jueces

deben aceptar críticas legítimas. Sin embargo, ha sucedido que poderes estatales y políticos individuales han atacado públicamente tanto a jueces a título individual como al poder judicial en su conjunto. Inevitablemente, tales ataques disminuirán o destruirán la confianza de la sociedad en la administración de justicia en su totalidad. Atacar a los jueces por ejercer sus funciones judiciales es una clara violación de la separación de poderes.

7. Una prensa libre es un instrumento de vigilancia de la democracia. Es una de las instituciones que sostiene el Estado de Derecho. La prensa libre, bajo presión en un número creciente de países, contribuye de manera importante a la transparencia y apertura del poder judicial. Sin embargo, existe una tendencia creciente de políticos y otros actores a influir en los medios de comunicación y utilizarlos como vehículo para atacar las decisiones de los tribunales. Esto, a su vez, ejerce presión sobre el poder judicial mediante la desinformación, la información errónea y la exposición dirigida de jueces. Esa presión ha llevado a amenazas no solo a la reputación de los jueces, sino también a su seguridad física y psicológica dentro y fuera del tribunal. Cada vez más personas insatisfechas se sienten con derecho a tomar represalias contra funcionarios, incluidos jueces.

8. El panorama mediático merece especial atención. El papel menguante de los medios tradicionales y del periodismo de investigación, junto con el auge de las redes sociales y la auto-publicación, aumenta el riesgo de juicios mediáticos en casos que atraen la atención pública. Supervisar estos desarrollos requiere recursos considerables. A menudo, puede ser extremadamente difícil identificar y contrarrestar narrativas perjudiciales para el poder judicial. Tales narrativas, por supuesto, contribuirán a una creciente pérdida de confianza pública.

9. La asignación de recursos inadecuados al poder judicial también contribuye a socavar el Estado de Derecho. Esto puede implicar limitar la capacidad del poder judicial para participar de manera significativa en la planificación y asignación del presupuesto judicial. Más directamente, puede significar recortar la financiación judicial o estancar los aumentos salariales del personal judicial y de apoyo a pesar de la inflación, mientras se aumentan los salarios en otros sectores públicos. También puede implicar negar a los jueces el personal de apoyo esencial. La falta de recursos conduce a una carga de trabajo excesiva. Inevitablemente, tales acciones degradan el estatuto de los jueces en funciones y desincentivan a otros a seguir una carrera judicial.

10. Los avances en digitalización han mejorado en muchos aspectos el acceso a la justicia. Estos avances también hacen que el trabajo de los jueces sea más eficiente y expedito. Esto beneficia tanto a los ciudadanos como al poder judicial. Sin embargo, estos avances tecnológicos conllevan sus propios problemas. En lo que respecta a los jueces individuales, el perfil de jueces y la capacidad de identificar a quienes han tomado decisiones en casos sensibles aumenta el riesgo de amenazas que pueden llegar a la violencia verbal o física. Los desafíos para el poder judicial en su conjunto incluyen la protección de datos y la posibilidad de que los sistemas de almacenamiento de datos permitan al ejecutivo acceder a las computadoras y datos de jueces o su personal, vulnerando así la independencia judicial.

III. Marco actual

11. Cada una de estas amenazas puede alterar el delicado equilibrio de poder entre el poder judicial, el ejecutivo y el legislativo. Cualquiera de estos desafíos podría disminuir el estatuto del poder judicial, así como exponerlo de manera inapropiada al escrutinio y control directo de otros poderes del Estado.

12. Deben existir salvaguardias legales e institucionales adecuadas a nivel europeo y nacional que aseguren una protección efectiva de la independencia judicial. Estas salvaguardias deben estar en línea con los estándares establecidos por la ENCJ. También deben cumplirse los estándares de la ENCJ en cuanto a transparencia y rendición de cuentas judicial.

13. Aunque existen mecanismos sistémicos a nivel de la UE para contrarrestar estas amenazas, su aplicación a menudo puede retrasarse. También están diseñados para abordar situaciones en las que la amenaza al Estado de Derecho ha alcanzado una etapa avanzada. Por lo tanto, como primera línea de defensa, estas amenazas deben ser enfrentadas por los propios poderes judiciales. Los Consejos del Poder Judicial y otros órganos de gobierno alternativos desempeñan un papel crucial en este sentido.

IV. Acciones

14. Es necesaria una vigilancia constante por parte de los Consejos del Poder Judicial para identificar de manera oportuna cualquier amenaza a la independencia judicial y cualquier desarrollo que pueda tender a socavar el Estado de Derecho.

15. Los Consejos del Poder Judicial también deben mostrar liderazgo y valentía. Deben actuar sin demora y emplear todos los medios a su disposición. Estos pueden incluir la emisión de opiniones legales, hablar en nombre del poder judicial, buscar apoyo público para los jueces, interactuar con los otros poderes del Estado y alertar a las instituciones y órganos judiciales de la UE sobre sus dificultades.

16. Deben tomarse medidas para establecer y mantener una cooperación eficaz con las organizaciones de otras profesiones jurídicas. La sociedad civil puede ser un aliado fuerte y confiable para el poder judicial en tiempos de necesidad. La confianza de la sociedad en el poder judicial puede generarse mediante la transparencia y la rendición de cuentas del poder judicial; también es clave el conocimiento generalizado sobre el Estado de Derecho. Por ello, los Consejos deben invertir en divulgación pública y educación, especialmente de los jóvenes.

17. La historia del poder judicial debe ser contada de manera efectiva. Los ciudadanos necesitan comprender qué significa la independencia judicial para ellos individualmente y qué beneficios aporta al crecimiento económico y la estabilidad de su país. Para lograr esto, el poder judicial debe establecer relaciones sólidas con los medios de comunicación y desarrollar canales de comunicación abiertos para llegar a audiencias más amplias.

18. La resiliencia del poder judicial debe construirse y mantenerse. Cuando el Estado de Derecho está en peligro, los Consejos del Poder Judicial deben compartir abiertamente su posición con el resto del poder judicial. La resiliencia puede construirse mediante medios activos. Estos incluyen la formación del poder judicial y

la inculcación del entendimiento entre los integrantes del poder judicial de que el Estado de Derecho implica muchos elementos más allá de la legalidad de las leyes. Los jueces deben ser informados de que la prudente convención de guardar silencio no aplica cuando el Estado de Derecho está en peligro. Deben ser alentados a compartir con sus colegas cualquier reserva o duda sobre procesos en curso.

19. Finalmente, la solidaridad entre los poderes judiciales europeos es un valor esencial. Como se articuló en la Declaración de Atenas 2022, vale la pena reiterarlo. Tanto la solidaridad preventiva como la reactiva son necesarias para proteger el Estado de Derecho. Los Consejos del Poder Judicial deben apoyar y hablar activamente en favor de cualquier colega en dificultades.